

|REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, tres (03) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE : SANDRA MELISA ZAPATA MONSALVE
DEMANDADOS : PAQUETE EXPRESS S.A. (en proceso de reorganización)
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO
RADICADO NACIONAL: 05-001-31-05-025-2017-00446
RADICADO INTERNO : 346-22
DECISIÓN : CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO : 035

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte accionante solicita se DECLARE que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 16 de marzo de 2015 al 27 de febrero de 2016; que la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la liquidación final de sus prestaciones sociales causadas entre el 01 de enero al 27 de febrero de 2016; al pago del reajuste de sus prestaciones sociales generadas con vigencia de la relación laboral; al reajuste de sus acreencias laborales (vacaciones) y los aportes al sistema de seguridad social, todo ello teniendo en cuenta una suma adicional de \$100.000 mensuales; al pago de la sanción moratoria del art. 65 del CST.

Se condene a la sociedad Paquete Express S.A al reconocimiento y pago de la suma de \$345.675 por los siguientes conceptos:

Cesantía: \$139.579

Intereses a la cesantía: \$2.707

Prima de servicio: \$139.579

Vacaciones: \$63.806

Se condene al reajuste de las prestaciones sociales causadas en vigencia del año 2015, bajo el entendido de haber devengado un salario para dicha anualidad, de \$744.350 más el auxilio de transporte equivalente a \$74.000; al reajuste al fondo de pensión de elección de la ex trabajadora, de cada una de las mensualidades con sujeción a \$100.000 adicionales, por la vigencia de la relación de trabajo; al pago de \$28.783.00 diarios desde el 01 de marzo de 2016 y hasta el momento del pago efectivo de la obligación, bajo el concepto de sanción moratoria del art. 65 del CST, el cual, a la presentación de la demanda asciende a \$12.952.350.00; a la indexación de las sumas adeudadas y al pago de costas procesales.

Como supuestos fácticos con los que sustenta sus pretensiones, expuso que entre las partes existió una relación laboral, medida por un contrato laboral a término indefinido, cuya vigencia fue del 16 de marzo de 2015 y el 27 de febrero de 2016, desempeñando el cargo de coordinadora de recursos humanos; recibiendo como contraprestación por el servicio el salario mínimo y adicional a su remuneración, percibió \$100.000 mensuales, dinero que se entregaba mediante recibos de caja menor; la suma adicional recibida por la demandante, siempre fue en razón a la ejecución de su trabajo y nunca se tuvo en cuenta para para la liquidación de las prestaciones sociales, acreencias laborales y aportes a la seguridad social integral; el 27 de febrero de 2016, la accionante presentó renuncia a su puesto de trabajo; la accionada no ha realizado el pago de la liquidación final de las prestaciones sociales.

CONTESTACIONES A LA DEMANDA

Paquete Express S.A. en su contestación a la demanda acepta la existencia del contrato laboral a término indefinido, los extremos temporales y el cargo desempeñado; el salario devengado; la renuncia presentada por la demandante. Señaló que si bien, es cierto que la accionada estaba en mora en el pago de la liquidación final, ello no era por falta de deseo de realizarla

sino a la falta de conocimiento en los eventos en que el empleado es renuente a recibir la liquidación, pero advierte que la empresa no ha sido omisiva, ya que ha realizado requerimientos de manera verbal a la empleada y en alguna oportunidad en forma escrita para que se presente, a lo cual hace caso omiso. Los demás hechos de la demanda, indica que no son ciertos. Se opone a todas las pretensiones de la demanda. Y no propuso excepciones de mérito (expediente digital 06).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 16 de noviembre de 2022, el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito, **CONDENÓ** a la sociedad Paquete Express S.A. en proceso de reorganización, a reconocer y a pagar a la demandante, la suma de \$12.433.154 por concepto de sanción moratoria consagrada en el artículo 65 del CST, la cual deberá ser indexada desde el 30 de agosto de 2017 hasta el momento de su pago efectivo; a pagar a la demandante la suma de \$1.905, por indexación de las vacaciones reconocidas en la liquidación final de prestaciones sociales.

ABSOLVIÓ a la sociedad Paquete Express S.A. en proceso de reorganización, de las demás pretensiones formuladas en su contra por la demandante. **DECLARÓ** probada de oficio la excepción de pago total de la obligación respecto de la liquidación final de prestaciones sociales.

Le solicitó al Juzgado 18 Laboral del Circuito de Medellín, realizara a órdenes del Juzgado 25 Laboral del Circuito de Medellín, la conversión del título judicial nro. 413 230 002 837 988, elaborado el 29 de agosto de 2017 y que se encuentra asociado al presente proceso, y autorizar su entrega a la demandante una vez ejecutoriada la decisión. Condenó en costas a la sociedad demandada.

IMPUGNACIÓN

El apoderado de la parte demandada, apela la sentencia, por considerar que en primera instancia no se analizó de fondo, el actuar de buena o mala fe de la accionada Paquete Express S.A.; que existen elementos para desacreditar la aplicación automática por el actuar de buena fe, que corresponden a las comunicaciones enviadas a la demandante, en las que

se solicitaba a la demandante que acudiera a recibir su liquidación; advierte que la demandante fungía como Coordinadora de Recursos Humanos, y fue ella quien manifestó, que su liquidación estaba saldada con el cruce de descuentos de nómina por la montura de lentes, lo cual quedó acreditado con la prueba testimonial y el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la accionada y por la demandante; además de lo anterior, no se tuvo en cuenta las inconsistencias en el interrogatorios de parte de la accionante, al decir que no recibió comunicación por la accionada y posteriormente aceptó haber sido contactada ella y su cónyuge, se desconoció la comunicación enviada a la demandante por correo certificado, donde se requería presentarse para recibir la liquidación, a lo cual hizo caso omiso; que no se tuvo en cuenta que la demandante aceptó que ella dejó pendiente, el pago de la liquidación laboral, situación que no consta documentalmente; y a la demandante se requirió en forma escrita y verbal.

Asegura que existe jurisprudencia que dice, cuál es el beneficio que obtiene eventualmente el empleador al omitir el pago de \$79.000, y corresponde a un baremo que le permite al despacho determinar cuál es el beneficio que pudiera obtener la sociedad Paquete Express S.A, en caso de no cancelar una liquidación de \$79.000. No se analizó el actuar mal intencionado de la parte demandante, ni el hecho de no haber solicitado la liquidación y haber esperado más de 8 meses para activar el aparato judicial.

En consecuencia, la decisión adoptada fue automática al haberse tenido en cuenta únicamente la fecha en que se realizó el pago.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de la parte demandada, en sus alegatos menciona que, reitera lo planteado en el recurso de apelación, al considerar que en la sentencia se dio una aplicación automática a la indemnización moratoria del art. 65 del CST, sin que se haya valorado en debida forma el actuar de buena fe de Paquete Express.S.A. en reorganización; apoya su apelación en la sentencia 24.397 de 2005. Las altas cortes han sido reiterativas en otorgar la directriz, donde los jueces de conocimiento deben valorar y analizar cada caso en concreto, sin esquemas preestablecidos y analizar la conducta

asumida por el empleador presuntamente renuente al pago de salarios y prestaciones debidos a la terminación del vínculo laboral.

Se presentaron pruebas encaminadas a acreditar el actual de buena fe que tuvo la entidad demandada para cancelar la liquidación laboral a la demandante, tales como llamadas telefónicas los cuales constan en audios, que dan fe de la existencia de esas comunicaciones, y donde se evidencia que a la demandante se invitaba a que acudiera a las instalaciones de su empleador a recibir su liquidación y la misma claramente manifestó la negación a acudir, sin que se hayan tenido como evidencia porque se desconoce la fecha de los audios, pero dejó de valorar la intencionalidad de la demandante de obtener una sanción moratoria como conocedora de la norma al ser la Coordinadora de Recursos Humanos y su intención de no acudir a las instalaciones de la empresa para el pago de la misma, y se omitió lo manifestado por el representante legal y la testigo Lina María Lopera quien aclaró que era ella quien le solicitaba a la demandante que acudiera recibir la liquidación. Y aunado a ello, resalta la existencia de la guía Nro. 959523187 emitida por SERVIENTREGA, firmada por la demandante, en donde identifica como remitente a Paquete Express S.A. de la comunicación, con la que resalta la buena fe en el obrar; se dio aplicación automática a la sanción, toda vez que se limitó simple y llanamente a identificar si se canceló y que tiempo se canceló la liquidación; del interrogatorio de parte absuelto por la demandante, no valoró las inconsistencias cuando dijo que nunca la contactaron pero cuando la confrontan con los audio, acepta que la contactaron, sin que se haya valorado la mala fe en su actuar; también dijo que nunca se habían comunicado con su esposo pero en los audios dijo que sí; dijo la demandante que se comunicaron antes de la interposición de la demanda pero previamente había dicho que nunca la contactaron; en los audios dijo la demandante que no quería ir a la empresa, situación que demuestra que nunca contó con la intención de acceder al pago de su liquidación a sabiendas de querer configurar una sanción moratoria automática y tan es así que manifestó en los audios “ustedes quieren que yo vaya es para negociar”; aceptó haber recibido comunicación antes de presentar la demanda pero posteriormente se contradiciéndose al señalar que días después de presentar la misma recibió comunicación; otra contradicción es porque aseguró la demandante que nunca solicitó por escrito el pago de su

liquidación, pero dijo haber dejado por consignado en la entrega del puesto y sustenta su apelación en la sentencia 32.416 de 2010.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico se centra en determinar si hay lugar a revocar la indemnización moratoria del art. 65 del CST impuesta a la sociedad Paquete Express S.A. por existir prueba de la buena fe con que obró la parte demandada.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en recientemente sentencia SL 4311 de 2022 dijo:

*“Pues bien, esta Corporación ha señalado de manera inveterada que la sanción moratoria prevista en la norma atrás citada no constituye una respuesta judicial automática frente al hecho objetivo de que el empleador, al finiquitar el contrato de trabajo deje de cancelar al trabajador los salarios y prestaciones sociales adeudados, de ahí que la misma encuentre lugar cuando quiera que, en el marco del proceso, **el empleador no aporte razones serias y atendibles de su conducta, en la medida que razonablemente lo hubiere llevado al convencimiento de que nada adeudaba por salarios o derechos sociales y, en este caso, se le tendrá como exonerado de la sanción prevista en el precepto legal referido.** Situación que fue justamente la que descartó el ad quem, toda vez que estableció que el ánimo de la demandada con los denominados bonos de campo fue la de sustraerse de sus obligaciones laborales.*

Por eso se ha dicho que el juez debe adelantar un examen riguroso del comportamiento asumido por el empleador en su condición de deudor moroso, así como un análisis conjunto de las pruebas y circunstancias que rodearon el marco de la relación de trabajo, en aras de establecer si los argumentos expuestos por la defensa son razonables y aceptables. En efecto, en la sentencia SL3936-2018, entre muchas otras...

*Asimismo, cumple acotar que **es el empleador quien debe asumir la carga de probar que obró sin intención fraudulenta**, como lo asentara esta Sala de la Corte en la sentencia SL199-2021:*

[...] cabe anotar que si bien es cierto en algún momento del desarrollo de su jurisprudencia esta Sala de la Corte consideró que, de cara a la imposición de la sanción por mora en el empleador incumplido existía una presunción de mala fe, ese discernimiento no es el que en la actualidad orienta sus decisiones, porque, pese a que mantiene su inveterado y pacífico criterio sobre la carga del empleador para exonerarse de la sanción por mora, de probar que su conducta omisiva en el pago de salarios y prestaciones sociales al terminar el contrato estuvo asistida de buena fe, considera que ello en

modo alguno supone la existencia de una presunción de mala fe, porque de las normas que regulan la señalada sanción moratoria no es dable extraer una presunción concebida en tales términos, postura que, ha dicho, se acompasa con el artículo 83 de la Carta Política. (...)” (Resalto de la Sala)

En este orden de ideas, al analizar la prueba en su conjunto, para la Sala no fue demostrado por el empleador Paquete Express S.A. la buena fe en el actuar, al haber dejado de cancelar la liquidación de prestaciones sociales a la demandante a la terminación del contrato de trabajo, bajo el entendido que la empresa empezó a hacer requerimientos y llamadas a la demandante con posterioridad a la presentación de la demanda. Convencimiento al que se llega por lo siguiente:

1º. Se encuentra probado, que la demandante desempeñó el cargo de Coordinadora de Recursos Humanos en la sociedad Paquete Express S.A. según el contrato laboral de fls 19 del expediente laboral 01, y en el interrogatorio de parte, la demandante informó que las funciones del cargo desempeñado eran las de estar pendiente de las afiliaciones a la EPS, ARL, seguridad social y todo el proceso para la contratación, era la encargada de hacer la nómina de los contratistas y de los empleados, de lo relacionado con dotaciones, **liquidaciones**, solucionar todos los inconvenientes que ocurrían con los auxiliares, como robos, daños, todo lo que tenía que ver con el personal e incapacidades; aceptó haber adquirido gafas en una jornada de salud que realizó la empresa, que le hicieron descuentos en 3 o 4 quincenas y quedó pendiente de \$500.000 y ella firmó la autorización para que le realizaran los descuentos por la suma de \$310.000 (autorización que reposa a fl 36 del expediente digital 01); aceptó haber elaborado su liquidación definitiva de prestaciones sociales y haber informado que quedaba pendiente su pago a la persona que la reemplazó y a la auxiliar contable Diana Carolina.

Por su parte, la testigo de la empresa demandada, Sra. Lina María Lopera (consultora de la empresa que apoya los sistemas de gestión humana, entre otros), afirmó que la demandante se encargaba de recursos humanos y ella misma había dejado listo todo lo relacionado con su liquidación y sus prestaciones pendientes; el pago se hizo al momento en el que se realizó la liquidación, porque quedaba saldado, dado que la demandante tenía una deducción de unas gafas, posteriormente la empresa en un proceso de auditorías encontraron un saldo, el cual no era claro porque la demandante

había informado que no se tenía saldo pendiente, se trataron de comunicar con la accionante sin que fuera posible y posteriormente la demandante se negaba a visitar la empresa para poder dar claridad en el tema; se enteraron del saldo adeudado a la demandante finalizando febrero de 2016 o empezando el año 2017 aproximadamente, la testigo habló con ella telefónicamente en una oportunidad y le indicó que se acercara a la empresa para dar claridad de lo que había pasado pero la demandante manifestó que no quería ir; la testigo le hizo entre 2 y 3 llamadas, pero su compañera Johana Suarez realizó las llamadas restantes; la demandante les indicaba que no quería ir a la empresa y que ellos sabían cuál era el procedimiento y lo que tenían que hacer porque la normativa era clara y la testigo le decía que querían tener claridad; que la demandante les propuso era enviar a un tío de ella para mandarle el documento, ella lo firmaba y lo hacía llegar, pero la empresa no lo aceptó.

Debiéndose resaltar, que cuando la testigo Lina María Lopera asegura, que la demandante informó a la persona que la reemplazó, que su liquidación estaba saldada, por tanto, su dicho es de oídas, en vista que no fue a la Sra. Lina María Lopera a quien se le dio la información directa, al no ser quien reemplazó a la demandante en el cargo de Coordinadora de Recursos Humanos.

2º. Se observa en el plenario, que la demanda presentada por la Sra. Sandra Melisa Zapata Monsalve tiene fecha de reparto del **2 de junio de 2017** y con posterioridad a esa fecha, el empleador desplegó actos tendientes a que la accionante recibiera en forma personal la liquidación adeudada, y para ello, hizo con el envío por Servientrega el **11 de julio de 2017** del requerimiento para que se acercara a la empresa a reclamar su liquidación. Pues a diferencia de lo señalado en primera instancia, que consideró que no existía prueba que dicha comunicación haya sido enviada, para esta Sala es concordante que la comunicación tenga fecha de elaboración del 9 de julio de 2017 y el envío tenga fecha del 11 de julio de 2017. Y además de ello, la demandante en su interrogatorio reconoció la firma de recibo, pero no dio explicación de qué había recibido en esa oportunidad de la empresa demandada.

3º. Por otro lado, se aportaron audios donde la demandante habló con las señoras Lina María Lopera y Johana Suarez, advirtiéndose que los mismos

se denominan “WhatsApp Audio **2017-09-06 at 9.53.24 AM**” (expediente digital 02), con lo que observa que la llamada se realizó en el año 2017 pero recuérdese que la renuncia presentada por la accionante tuvo lugar el **27 de febrero de 2016**.

4º. Aunado a lo anterior, del audio aportado por la empresa demandada denominado “WhatsApp Audio 2017-09-06 at 9.53.24 AM” (expediente digital 02), el cual se puesto de presente a la demandante en su interrogatorio de parte y en dicha oportunidad la Sra. Sandra Melisa Zapata Monsalve reconoció su voz y aceptó haber tenido esa conversación, se extrae lo siguiente:

“- Tu cuando puedes venir?

- ... sinceramente no quiero ir.
- Porque?
- Porque no quiero entrar a esa empresa, porque Don Antonio me dijo cuando yo me fui a ir, que quisiera que yo estuviera muerta... para alguien que no le es agradable mi presencia no... no quiero ir... ustedes saben que legalmente esa liquidación ya debía haber estado consignada y para lo que ustedes quieren que yo vaya es para negociar...
- No es a negociar contigo, lo que pasa es que aquí tengo una carpeta Melisa, en donde, tú sabes que anteriormente estaba Julián, donde te estuvo llamando, ... y el ya salió de la empresa, **ya lo que se está haciendo acá es dando el saneamiento totalmente a lo que hay y lo que había, y entre eso teníamos un pendiente contigo**, no es más. (...)
- Legalmente la liquidación ya va para más de un año, yo renuncie en marzo, ya va más de un año.
- ¿Y tu porque no respondías las llamadas y recados que se te dejaban en tu casa, con tu esposo? ...
- Con mi esposo sí, pero en la empresa en que estaba trabajaba de lunes a lunes. Lina, eso no es excusa...”

De dicha conversación evidencia la mala fe de la accionada, porque pese a tener conocimiento de la existencia de un valor adeudado y de existir un “pendiente” con la Sra. Sandra Melisa Zapata Monsalve, el actuar de la sociedad Paquete Express S.A. fue dilatoria, al punto de iniciar acciones contundentes para lograr la comunicación con la demandante una vez fue presentada la demanda en junio de 2017.

5º. Otra de las muestras de mala fe se plantea con el depósito judicial realizado por el empleador moroso el 28 de agosto de 2017, solo cuando se presentó la demanda ordinaria laboral.

Debiéndose preguntar ¿Por qué la sociedad Paquete Express S.A. no realizó el mismo depósito judicial antes de que fuera demandado? ¿Por qué el empleador no acudió a realizar el depósito judicial, si presuntamente la accionante no respondía a las llamadas ni a los requerimientos realizados?

6º. El representante legal de la sociedad Paquete Express S.A. aceptó que la sociedad demandada tenía conocimiento, que las prestaciones sociales se podrían consignar a órdenes de un juzgado laboral, y no obstante omitió actuar conforme a la ley.

Ahora, en relación a las contradicciones de la demandante en su interrogatorio de parte y la mala fe en el actuar de la demandante como sustento para revocar la indemnización moratoria reconocida, se debe recordar a la parte recurrente, que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha dirigido el análisis de la mala fe, en el actuar del empleador que es quien debió realizar el pago oportuno de los derechos laborales de los trabajadores, y en este evento, si bien, la Sra. Sandra Melisa Zapata Monsalve desempeñaba el cargo de Coordinadora de Gestión Humana y a su cargo estaba realizar las liquidaciones, lo cierto es que ella no era la encargada del pago de las mismas, al no hacer parte del área financiera. Así las cosas, no puede pretender la sociedad Paquete Express S.A. que la mala fe sea invertida y sea analizada por el actuar de la demandante.

Con fundamento en lo expresado, se CONFIRMARÁ la sentencia de primera instancia.

Costas en esta instancia, en la suma de \$1.160.000, a cargo de la sociedad Paquete Express S.A. por no prosperar el recurso de apelación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia emitida por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín, conforme a las razones expresadas en la parte motiva de la providencia.

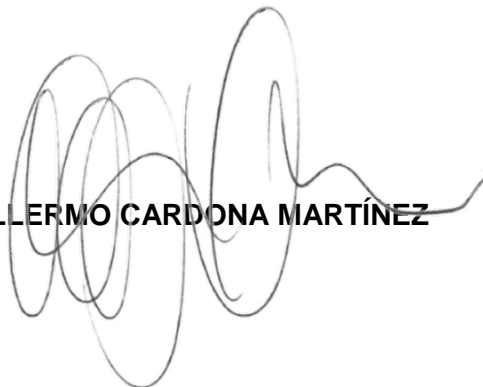
SEGUNDA: Costas en esta instancia, en la suma de \$1.160.000, a cargo de la sociedad Paquete Express S.A. por no prosperar el recurso de apelación.

TERCERO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE : SANDRA MELISA ZAPATA MONSALVE
DEMANDADOS : PAQUETE EXPRESS S.A. (en proceso de reorganización)
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO
RADICADO NACIONAL: 05-001-31-05-025-2017-00446
RADICADO INTERNO : 346-22
DECISIÓN : CONFIRMA SENTENCIA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 06 de marzo de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 06 de marzo de 2023 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO